



REPÚBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial del Poder Público



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

SENTENCIA

Proceso : Ordinario escritural
Demandante : **MARÍA LUCÍA ROBLEDO PÉREZ**
Demandados : **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.,**
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
Radicado : **05001 31 05 021 2021 00002 01**
Instancia : Segunda
Providencia : Sentencia
Temas y : Seguridad Social – Pago de cálculo actuarial, reliquidación
Subtemas : pensión vejez -
Decisión : Confirma Sentencia condenatoria de Primera Instancia
Sentencia No : 264

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión¹:

¹ De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

ANTECEDENTES

Pretensiones:

Se condene a Empresas Públicas de Medellín (EPM) a girar a COLPENSIONES, los aportes dejados de cotizar al Sistema de Pensiones, entre el 1° de julio de 2011 y el 31 de mayo de 2013, a través de un cálculo actuarial; en subsidio, liquida el cálculo actuarial expidiendo certificación de Bono Pensional tipo B; se condene a COLPENSIONES a calcular de nuevo el ingreso base de liquidación, incluyendo la totalidad de los ingresos percibidos para el período 1° de julio de 2011 hasta el 31 de mayo de 2013, pagando el valor adicional respecto a lo pagado en la actualidad por concepto de mesada pensional, desde el 31 de mayo de 2013; en subsidio, se condene a EPM a pagar el mayor valor desde el 31 de mayo de 2013, hasta la ejecutoria de la Sentencia.

Hechos relevantes de la demanda:

Se afirma que la demandante laboró al servicio de EPM desde el 31 de marzo de 1986, hasta el 31 de mayo de 2013, efectuándose cotizaciones al Sistema de Pensiones hasta el 21 de junio de 2011, informándosele por parte de la Jefe de Unidad de Protección Social, que se había cesado el pago de aportes por haber cumplido con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, sin que se le diera a conocer la posibilidad de seguir cotizando en forma voluntaria y los conocimientos del demandante sobre el tema eran precarios, vulnerándose el derecho a decidir de manera informada; solo conoció los efectos de la decisión cuando COLPENSIONES liquidó la pensión actualizada con el IPC, sin tener en cuenta los salarios devengados entre julio de 2011 y mayo de 2013, perdiendo

la posibilidad de obtener una reliquidación y mejoramiento de la pensión de vejez, acorde con su esfuerzo,; expone que el empleador se proponía descargar en el salario del trabajador el pago del 100% de los aportes en pensiones, lo cual era una decisión difícil de tomar, pues afectaba ostensiblemente su ingreso mensual, del cual dependía el sustento de su familia, transgrediendo el principio de buena fe y las normas que rigen el derecho laboral y la seguridad social, así como la jurisprudencia existente sobre la materia, en Sentencia SL2556-2020.

Respuestas a la demanda:

COLPENSIONES mediante apoderada judicial, manifestó que no le constan los hechos afirmados en la demanda; se opuso a las pretensiones formuladas y propuso en su defensa las excepciones denominadas falta de legitimación en la causa, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de indexación, buena fe, prescripción, innominada, presunción de legalidad de actos administrativos, descuento del retroactivo por salud, imposibilidad de condena en costas, compensación.

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. (EPM) a través de apoderada, admitió el tiempo laborado por la demandante, las cotizaciones efectuadas al sistema de pensiones y el cese de aportes entre el 21 de junio de 2011 al 31 de mayo de 2013, fecha en que finalizó la relación laboral, en aplicación de lo dispuesto en la normatividad según la cual, la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, sin que la demandante manifestara a EPM la voluntad de continuar cotizando al Sistema de Pensiones; explica que la decisión se adoptó conforme a los lineamientos dados

por la Contraloría General de Medellín, Gerencia Seccional Pensiones del Instituto de Seguros Sociales y precedentes vinculantes del H. Consejo de Estado y de la H. Corte Suprema de Justicia, así como, Circular Conjunta de los Ministerios de Hacienda y de la Protección Social. Se opuso a las pretensiones formuladas y propuso en su defensa las excepciones que denominó violación de la seguridad jurídica por aplicación retroactiva del precedente judicial, carencia de acción y derecho sustancial para pedir, inexistencia sustancial del derecho, pago total, prescripción.

Sentencia de Primera Instancia:

El **Juzgado Veintiuno Laboral** del Circuito de Medellín, declaró la ineficacia de la decisión de Empresas Públicas de Medellín, consistente en cesar los aportes al Sistema General de Pensiones en favor de la demandante a partir **de julio de 2011 hasta mayo de 2013**, condenándola a **reconocer y pagar** a satisfacción de COLPENSIONES, el **título actuarial** por los aportes pensionales dejados de pagar, con base en el salario devengado en los citados períodos; ordenó a COLPENSIONES realizar el cálculo actuarial teniendo en cuenta el salario de la demandante y una vez recibidas las sumas correspondientes reliquidar la mesada pensional; condenó a **COLPENSIONES** a pagar a la demandante el mayor valor del **retroactivo pensional**, causado desde el 15 de julio de 2018, calculando hasta julio de 2022 la suma de \$2.968.014 y el valor de la mesada pensional a partir de agosto de 2022 en cuantía de \$3.197.887, sin perjuicio de continuar percibiendo la mesada actualmente en caso de ser mayor al valor reconocido en la Sentencia; **indexación** sobre las anteriores sumas; condenó en Costas a EPM fijando como agencias en derecho

dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la demandante.

Recursos de Apelación:

La apoderada de EPM solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia, en cuanto condenó a EPM a pagar a COLPENSIONES el **cálculo actuarial a favor de la demandante**, con la respectiva indexación. Sostiene que la entidad ha actuado conforme a la normatividad aplicable, la cual faculta al empleador para suspender el pago de cotizaciones al sistema de pensiones una vez la trabajadora cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez, también según lo dispuesto por la Contraloría General de Medellín, la Gerencia Seccional de Pensiones del I.S.S. y precedentes vinculantes del H. Consejo de Estado y la H. Corte Suprema de Justicia. Refiere a que la H. Corte Suprema de Justicia a partir del año 2020, crea unas nuevas reglas jurisprudenciales apartándose del propio precedente, imponiéndose una obligación no contemplada en norma alguna y se está aplicando en forma retroactiva el cambio de precedente judicial; siendo obligación de las entidades de seguridad social y no del empleador, brindar la asesoría pensional respectiva. No hay lugar a la imposición de intereses moratorios, ya que EPM no es administradora de pensiones, afilió a la trabajadora y efectuó las cotizaciones, por lo que tampoco procede indexación; no debe imponerse Costas ya que la condena no surge de una omisión injustificada, sino de un cambio jurisprudencial.

Por su parte, **el apoderado de COLPENSIONES solicita se revoque la condena al pago de retroactivo pensional**, la que surgió por el incumplimiento de EPM frente a sus obligaciones como empleador, en el pago de aportes por los periodos entre el 1º

de julio de 2011 hasta el 31 de mayo de 2013, debiéndose imponer esa condena a cargo a EPM como empleador incumplido y quien generó el perjuicio en la pensión de la demandante.

Alegatos de conclusión:

Los apoderados de la demandante y COLPENSIONES reiteraron argumentos expuestos en el trámite de Primera Instancia.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos y sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de Apelación y se conocerá también en el grado jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES; de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984; 15, 66 A y 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, respectivamente.

Conflicto jurídico:

El asunto a dirimir, radica en verificar si procede revocar la Sentencia de Primera Instancia, analizándose si EPM

se encontraba facultada para dejar de efectuar aportes al Sistema de Pensiones en favor de la demandante o si estaba obligada a consultarle, de manera previa, si era su voluntad continuar cotizando para mejorar el monto de la pensión de vejez o si decidía retirarse del Sistema de Pensiones. En caso de mantenerse la decisión, se revisará si corresponde a COLPENSIONES reliquidar la pensión de vejez de la demandante, teniendo en cuenta el cálculo actuarial a cargo de EPM.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia; por las siguientes razones:

En el asunto bajo estudio, se encuentra por fuera de discusión en esta Segunda Instancia, que mediante Resolución No 006930 del 20 de marzo de 2012, el I.S.S. reconoció pensión de vejez a la señora María Lucía Robledo Pérez en aplicación de la Ley 33 de 1985, dejándose supeditada a que se allegara el acto administrativo de retiro definitivo del servicio público (fls 60 a 62); mediante Resolución GNR 115091 del 29 de mayo de 2013, COLPENSIONES dispuso el ingreso a nómina a partir del 1º de junio de 2013 (fls 65 a 71); según historia laboral generada por COLPENSIONES el 21 de septiembre de 2021, EPM efectuó aportes al Sistema General de Pensiones a favor de la demandante, entre el 1º de julio de 1995 y el 30 de junio de 2011, ciclo en el que fue reportada la novedad de retiro con fecha 13 de julio de 2011 (archivo 40 Exp. Activo Pequeñas Causas).

Para imponer condena **el Juzgado de Primera Instancia consideró en términos generales,** que el cese de cotizaciones al

sistema de pensiones, debe estar precedido de un acuerdo entre trabajador y empleador, mas no de una decisión unilateral por parte del empleador, impidiéndose que la demandante efectuara cotizaciones adicionales a las mínimas requeridas.

Sobre el tema objeto de apelación, el **artículo 17 de la Ley 100 de 1993** modificado por el 4° de la Ley 797 de 2003, dispone que **durante la vigencia de la relación laboral** o del contrato de prestación de servicios, **los afiliados, empleadores y contratistas, deberán efectuar cotizaciones obligatorias al Sistema de Pensiones, obligación que cesa cuando el trabajador cumple los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez.**

Al respecto, **la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia 2556 del 8 de julio de 2020 Radicado 69645**, al abordar el estudio de un caso similar, promovido en contra de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., **indicó que la norma antes citada, también contempla que las partes de la relación pueden optar por seguir cotizando**, de modo que **la decisión que adopte uno de ellos** -trabajador o empleador- **es vinculante para el otro** y, en esa medida, **cada uno debe contribuir en el porcentaje que por ley le corresponde**, sin que el trabajador deba asumir la totalidad de la cotización; así mismo, que **la facultad del empleador de suspender el pago de aportes pensionales es válida siempre que cuente con la expresa aquiescencia del trabajador y le informe previamente si su determinación de dejar de cotizar puede alterar la cuantía de la prestación pensional**, de modo que la opción que este ejerza sea libre y consciente, teniendo en cuenta que, por su posición socioeconómica y educativa, muchas veces los trabajadores desconocen el significado y alcance de tal decisión; los siguientes son los apartes pertinentes:

“...Ahora bien, para la Sala la interpretación según la cual, si el trabajador decide seguir aportando al sistema debe correr con la totalidad del valor de la cotización, es injustificada y tornaría en ineficaz esa opción legal, dado que la asunción del 100% de la obligación por parte de un solo sujeto de la relación laboral, en este caso, del más débil económicamente, es desproporcionada y, en la práctica, niega a los trabajadores la posibilidad de incrementar su pensión para nivelarla con los ingresos percibidos en su vida laboral activa. Adicionalmente, sin razón alguna, libera a los empleadores de su deber de contribuir al sistema, el cual no solo está diseñado para proteger a los trabajadores y/a sus beneficiarios, también a la población más pobre y vulnerable a través de los fondos solidarios.

(...)

A la luz de lo explicado, si bien el empleador puede dejar de cotizar al sistema general de pensiones cuando el trabajador cumple los requisitos pensionales, **está en la obligación de informarle previamente a fin de que este decida si desea o no hacer uso de la opción de continuar cotizando.** De lo contrario, **la facultad consagrada en su favor en el inciso 3.º del artículo 17 de la Ley 100 de 1993 se tornaría nugatoria si el empleador de forma unilateral e inconsulta así procede.**

Adicionalmente, **en virtud de la buena fe contractual, y con el fin de que el trabajador pueda ejercer la opción de manera informada y consciente, el empleador que pretenda suspender el pago de aportes al sistema de pensiones,** conforme lo previsto en el inciso 2.º del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, **previamente deberá advertir al trabajador que tal actuar puede alterar el monto de la prestación.** Ello, si se tiene en cuenta que por su posición socioeconómica y educativa, muchas veces los trabajadores desconocen el significado y alcance de una decisión de esta magnitud, de allí que la advertencia sobre la eventual afectación de la pensión sea un contenido lógico y mínimo derivado del deber de informar...” (Negritas fuera de texto).

Postura reiterada en Sentencia SL5082 del 30 de septiembre de 2020 Radicado 58322, proceso promovido también en contra de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., **señalando que una vez el trabajador reunió los requisitos mínimos pensionales, el empleador no podía unilateralmente dejar de cotizar al sistema pensional,** pues debió consultar la aquiescencia del trabajador y si era su voluntad, continuar cotizando; **sin que los pagos de los aportes fueran de su cargo exclusivo.** En el mismo sentido se han proferido las **Sentencias SL3006 del 14 de julio y SL1184 del 15 de marzo, ambas de 2021, también en contra de Empresas Públicas de Medellín.**

La apoderada de la codemandada EPM, sostiene en términos generales, que la obligación de cotizar al sistema de

pensiones cesa cuando se cumplen los requisitos exigidos para acceder a la pensión de vejez, citando postura anterior que tenía la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y afirmando que se está aplicando el cambio de precedente judicial con efectos retroactivos, para casos ocurridos años atrás; así mismo, refiere a decisiones sobre la materia del H. Consejo de Estado, pronunciamientos de la Contraloría General de Medellín y la Gerencia Seccional de Pensiones del I.S.S., en el sentido de no exigir una consulta previa al trabajador sobre el cese de cotizaciones.

Frente a lo anterior, encuentra esta Sala de Decisión Laboral, que el empleador demandado incumplió el procedimiento señalado en la jurisprudencia actual y vigente de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, antes citada, para que tuviera efectos la decisión de no continuar efectuando unilateralmente los aportes al Sistema de Pensiones, ya que, **de manera previa, debió consultar si era voluntad de la trabajadora** dejar de cotizar al Sistema pensional o continuar haciéndolo.

En cuanto a que EPM E.S.P. actuó acorde a conceptos de órganos de control, a la normatividad y jurisprudencia vigente y que las últimas decisiones de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia generan otra interpretación y desconocen su propia jurisprudencia; debe indicarse que el **artículo 234 de la Constitución Política**, contempla que **la H. Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria** y tiene la atribución de actuar como Tribunal de Casación (artículo 235); además, dicha Corporación, en decisión **AL8458 de 2017 Radicado 77136**, indicó que, a partir de su conformación en el año 1886, **se le asignó como finalidad principal la unificación de la jurisprudencia**; por su parte, la **H.**

Corte Constitucional en Sentencia SU 113 de 2018, señaló que el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales, es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre, encargados de unificar la jurisprudencia dentro de su respectiva jurisdicción.

Así mismo, los pronunciamientos de la H. Corte Suprema de Justicia se convierten en doctrina legal probable, conforme el artículo 4° de la ley 169 de 1896, definida como “...tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como tribunal de casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla en casos análogos...”; norma que fue revisada por la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-836 de 2001, cuyos alcances allí se plasman, enfatizándose en la fuerza vinculante de la doctrina dictada por la H. Corte Suprema, que proviene de ser el órgano encargado de establecerla, en su función de unificar la jurisprudencia ordinaria; lo que obliga a los Jueces a materializar la igualdad frente a la ley y frente al trato por parte de las autoridades, propiciándose la ‘seguridad jurídica’.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral, que el asunto objeto de análisis, es de aspectos muy similares a los abordados en el precedente judicial citado, promovidos por ex trabajadores de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., donde el Órgano de Cierre de la Especialidad Laboral señaló que, la decisión del trabajador respecto a dejar de cotizar al Sistema de Pensiones, una vez cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tiene que ser libre, consciente y completamente informada; lo que en términos de la Corte, solo se predica si su empleador cumple el deber que tiene de informarle acerca de las consecuencias jurídicas, que esa importante determinación puede acarrear en su situación pensional, lo cual no

se encuentra demostrado en este caso por parte de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Por lo explicado, es procedente **confirmar** la Sentencia de Primera Instancia, en cuanto condenó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. a cancelar a COLPENSIONES y en favor de la demandante, el cálculo actuarial cuyo valor represente los aportes a pensión dejados de sufragar, entre julio de 2011 y mayo de 2013.

Respecto a la solicitud del apoderado de COLPENSIONES, referente a que se revoque la condena al pago de retroactivo pensional y en su lugar se imponga a cargo a EPM, como empleador que incumplió el pago de aportes por los periodos entre el 1° de julio de 2011 hasta el 31 de mayo de 2013 y afectó la mesada pensional de la demandante; tenemos que:

Se encuentra ajustada a derecho la orden impuesta a cargo de COLPENSIONES, por ser la entidad administradora del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, facultada legalmente para recibir las afiliaciones de los trabajadores al Sistema de Pensiones, con el correspondiente pago de las cotizaciones a cargo del empleador, causadas por la prestación del servicio de la demandante en este caso; así mismo, en el ordenamiento jurídico tiene asignada la función y obligación de reconocer y pagar las prestaciones económicas contempladas en el Sistema General de Pensiones, como las pensiones de vejez, previo cumplimiento de los requisitos legales, lo que incluye **liquidar y recibir el pago del cálculo actuarial a cargo de EPM**, el cual debe incorporarse en la historia laboral de la demandante, en aras de contribuir a la financiación de las prestaciones económicas derivadas del Sistema de Seguridad Social en Pensiones; **siendo procedente la reliquidación de la mesada pensional** -previo pago del cálculo

actuarial a satisfacción de Colpensiones- con el ingreso base de liquidación de los últimos diez (10) años cotizados, conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993; teniendo en cuenta para ello, las cotizaciones contenidas en el cálculo actuarial cuyo pago está a cargo de EPM E.S.P.; observándose bien liquidados los valores liquidados por el Juzgado, así como la fecha desde la cual se reconoció el retroactivo pensional, esto es, a partir del 15 de julio del año 2018, teniendo en cuenta que si bien la pensión de vejez se empezó a disfrutar desde el 1º de junio del año 2013, fue solo hasta el 15 de julio del año 2021 cuando se presentó la reclamación administrativa ante COLPENSIONES (fl 69 archivo 22 cuaderno C03). Así mismo, es procedente la indexación impuesta como mecanismo que permite compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo, causado por el efecto inflacionario.

Así las cosas, **esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente confirmar la Sentencia de Primera Instancia**, que por vía de Apelación se revisa y en el grado jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES, incluyendo lo relativo a la condena en Costas.

COSTAS:

Se condenará en Costas en esta Segunda Instancia a cargo de las codemandadas Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y COLPENSIONES, al no haber prosperado los recursos de apelación formulados, fijándose como agencias en derecho un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.000.000) en razón del

50% a cargo de cada entidad y en favor de la demandante; de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso y Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Se **CONFIRMA** la Sentencia de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de Apelación se revisa y en el grado jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES; de conformidad con lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

SEGUNDO: Se **CONDENA en Costas en esta Segunda Instancia**, a cargo de las codemandadas **Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y COLPENSIONES**, fijándose como agencias en derecho un (1) salario mínimo legal mensual vigente (\$1.000.000) a razón del 50% a cargo de cada entidad y en favor de la demandante **MARÍA LUCÍA ROBLEDO PÉREZ**; como quedó explicado en la parte motiva.

TERCERO: Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se ordena devolver el proceso al Despacho de origen.

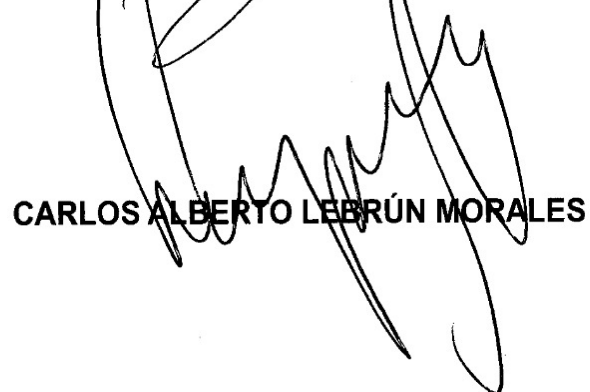
Los Magistrados,



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SECRETARIA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso : Ordinario escritural
Demandante : **MARÍA LUCÍA ROBLEDO PÉREZ**
Demandados : **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.,**
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
Radicado : **05001 31 05 021 2021 00002 01**
Instancia : Segunda
Providencia : Sentencia
Temas y : Seguridad Social – Pago de cálculo actuarial, reliquidación
Subtemas : pensión vejez -
Decisión : Confirma Sentencia condenatoria de Primera Instancia
Sentencia No : 264

FECHA SENTENCIA:

21 de noviembre de 2022

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Fijado hoy miércoles 23 de noviembre de 2022 a las 8:00 Am Desfijado hoy
miércoles 23 de noviembre de 2022 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en
concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al
vencimiento del termino de fijación del edicto.

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO